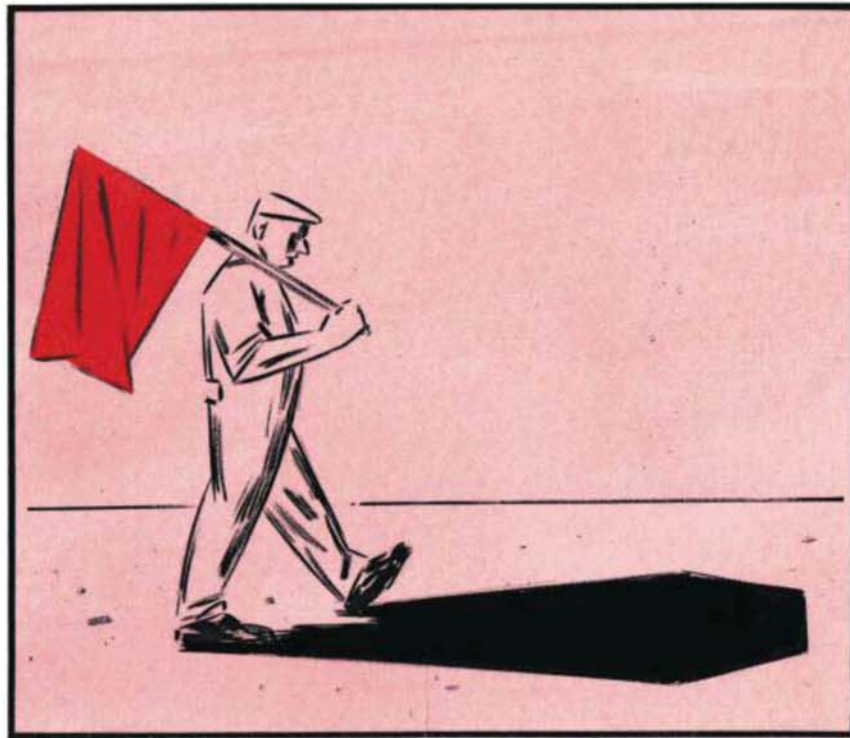


CAJERO AUTOMÁTICO Por El Roto

1^o de mayo

LA COLUMNA

La derecha se radicaliza

Josep Ramoneda



EL GOBIERNO HA CONSUMADO una iniciativa miserable: el 31 de agosto caducarán las tarjetas sanitarias de los inmigrantes ilegales. Era un motivo de orgullo para este país: nadie se quedaba sin atención sanitaria. La salud por delante de las pertenencias nacionales y de las fronteras administrativas. Se acabó. A los parias, que los cure Dios. Es una medida injusta, porque nada tiene derecho a condenar a una persona a no ser atendida sanitariamente. Es una medida oportunista, para dar carnaza a la peor xenofobia. Es una medida peligrosa, porque puede tener consecuencias sociales y sanitarias muy negativas. Y es una medida que da la dimensión de la talla moral del Ejecutivo. Porque las decisiones políticas como las decisiones económicas también son opciones morales por más que se haya pretendido que la política y la empresa fueran territorios de excepción, ajenos a las exigencias morales de la vida civil.

Después de esta fechoría, otra: el Gobierno decide que los jóvenes con más de 26 años que no hayan cotizado deberán probar que no tienen ingresos para acceder a la sanidad pública. Con el argumento de que no hay dinero, todo está permitido. De golpe y porrazo se rompe la universalidad de las prestaciones del Estado de bienestar y, como se ha dicho estos días, el derecho a la salud se convierte en un

seguro sanitario. Solo el que paga existe. Lo que fue una conquista de toda la sociedad española lo ha evaporado una idea nada inocente de la austeridad. El poder recubre todas estas decisiones con un discurso de choque que solo pretende anestesiar a la ciudadanía. Pero la estrategia está clara: liquidar las bases ideológicas y el consenso sobre el Estado de bienestar y consolidar un sistema político que divida a la sociedad entre los que pueden pagar y los que no pueden pagar.

Estas medidas han venido precedidas de una reforma laboral, claramente decantada a favor de los intereses del dinero, que, como era previsible, está dando paro y no empleo; una amnistía fiscal indecorosa que premia a los defraudadores del fisco en el mismo momento en que aumenta la presión fiscal, y un cambio legislativo sobre Radio Televisión Española para convertirla de nuevo en el órgano de propaganda del Gobierno. La suma de todo ello no puede llevar a engaño. El objetivo es la consolidación de los privilegios de los que más tienen y el control social a través de la televisión, tanto la pública como la privada, en manos afines al PP. Un modelo que, si le añadimos unas dosis de corrupción, se asemeja mucho al berlusconismo.

Todo ello forma parte de una estrategia política basada en una ideología que se fundamenta en tres principios: la sociedad no existe, solo existen los individuos; por tanto, el vecino como potencial enemigo del bienestar propio. Todo lo que favorece al poder económico favorece a la sociedad; por tanto, la austeridad rige para todos menos para los más poderosos. Y

la economía es lo único importante, de modo que el primer criterio del Estado debe ser la cuenta de resultados. Aderezada, por supuesto, con el eterno recurso patrioterico: los españoles primero. Aunque unos más que otros. Habría que recordarles a los gobernantes de la derecha que, como escribe Tzvetan Todorov, "el objeto del Estado no es la rentabilidad, sino el bienestar de los ciudadanos".

Esta radicalización de la derecha, que se está haciendo extensiva a toda Europa, acostumbra a edulcorarse con un argumento falso: la distinción entre decisiones técnicas y decisiones políticas que es propia de unos tiempos en que la doctrina económica se ha convertido en el principal agente ideológico de la hegemonía conservadora. El argumento pretende que la política es deudora de intereses partidistas espurios y que solo cediendo la voz al experto se pueden tomar las decisiones adecuadas: las que la ciencia exige. De modo que de un solo golpe hemos sustituido la soberanía ciudadana, como portadora de la última palabra, por la soberanía del experto. Una de dos: o aceptamos que la precariedad científica de la economía está probada por su falta de acierto en la previsión, o aceptamos que cuando se han equivocado ha sido a conciencia para beneficiar intereses determinados. Ninguna de las dos hipótesis da una autoridad especial a la ciencia económica sobre la política. En realidad, toda decisión técnica tiene algún objetivo; por tanto, es política. Pero la aureola que todavía tiene la ciencia es útil para el político para convertir en verdad absoluta una afirmación ideológica: "No hay alternativa".

OPINIÓN

Emilio Ontiveros



Nuevos acentos

ES DIFÍCIL PASAR POR ALTO las declaraciones que el presidente del Banco Central Europeo (BCE) acaba de hacer ante el Parlamento Europeo, admitiendo que la eurozona "probablemente se encuentra en una de las fases más difíciles". La concentración en poco tiempo de políticas fiscales restrictivas "está empezando a manifestar efectos contractivos". Draghi también admitió que, a pesar de las inyecciones excepcionales de liquidez a los bancos, el crédito al sector privado no crece y, en consecuencia, tampoco lo hace la inversión empresarial. No solo el crecimiento económico actual está deprimido: se están minando también los fundamentos del crecimiento potencial. La desaparición de empresas, la dificultad para que nazcan, la reducción de las inversiones en capital tecnológico, el deterioro del capital humano asociado al aumento del desempleo, en especial de su componente estructural así como el juvenil, determinan un cuadro cada día más difícil de revertir.

Tardó reconocimiento, pero susceptible de contribuir al necesario cambio de las políticas macroeconómicas. Hace tiempo que dentro y fuera de Europa se cuestionó la orientación contractiva de las políti-

Casi toda la oposición francesa reclama una más viable dosificación del saneamiento fiscal en la eurozona

cas presupuestarias de todas las economías que conforman la eurozona, con bastante independencia del origen de sus problemas y de la severidad del escrutinio que sobre ellas ejercen los mercados de deuda pública. La necesidad de distribuir en el tiempo el saneamiento público y adoptar en el corto plazo estímulos al crecimiento la sugirió el Fondo Monetario Internacional antes de que su nueva directora gerente, exministra del actual presidente francés, hiciera suya esa propuesta. Ahora la casi totalidad de la oposición francesa reclama una más viable dosificación del saneamiento fiscal en la eurozona. Incluso Sarkozy demanda del BCE mayor contribución al crecimiento de Europa. También las tensiones en el Gobierno holandés dejan constancia de la frustración derivada de responder a las amenazas recesivas con más ajustes presupuestarios.

No menos significativas son las declaraciones, también esta misma semana, de la canciller Merkel respaldando esos comentarios de Draghi. Es verdad que de forma preeminente a través de reformas estructurales, pero admitiendo por fin que el ajuste presupuestario no puede ser la única respuesta a la crisis. Un acento apenas, pero tanto más significativo cuanto más explícita ha sido hasta ahora la obsesión por conceder a la austeridad el papel de alimentador de un círculo virtuoso que la realidad desautoriza.

Algunos lectores mostrarán su escepticismo por este empeño en advertir entonaciones nuevas en la definición de las políticas europeas. Quizá no faltan razones para juzgarlo precipitado, ingenuo. Pero parto de la base de que los resultados de las decisiones adoptadas, también por los políticos, acaban siendo más influyentes que los prejuicios. Y esta crisis lleva años enmendando la plana a los obcecados. •

EL PAÍS DOMINGO 29.04.12 13

Printed and distributed by NewspaperDirect
www.newspaperdirect.com US Can. 1.877.825.4643 Intern. 800.524.5264
COPYRIGHT AND PRINTED BY REPUBLICAN CO.